

OFENSIVA Y CONTRAOFENSIVA EN LA UNIVERSIDAD ESTADOUNIDENSE

Al inaugurarse el nuevo año académico, ni los estudiantes activistas ni las autoridades universitarias están en disposición de vaticinar cuáles son los prospectos de paz en los centros de alta educación de Estados Unidos. Ambos campos, empero, parecen revigorizarse ante la posibilidad de que resurja el antagonismo que ha interrumpido la vida académica —y cobrado trágico precio en vidas humanas— durante varios de los últimos años. Acaso sea el miedo el único sentimiento fuerte compartido por unos y otros. El fracaso de toda gestión dirigida a mermar ese “balance de terror” ha conducido a un aumento de violencia que, a veces, hace que el *campus* estadounidense luzca como un reflejo en tono menor de la Indochina.

La sensibilidad antibélica de los estudiantes no necesita mayor comprobación, pero ha sido sólo recientemente que el sentimiento antiestudiantil de un segmento *in crescendo* del público se ha convertido en legislación estatal específica y en nuevas regulaciones de los colegios y universidades. En los finales del último año académico, en la reverberación de los disturbios de extensión nacional aventados en protesta contra la intervención de Estados Unidos en Camboya, y la muerte de estudiantes en encuentros con la policía y la Guardia Nacional, treinta y dos estados aprobaron leyes destinadas a poner coto al desorden y castigar a los transgresores. La múltiple legislación incluyó la retirada de ayuda económica a los estudiantes participantes de demostraciones públicas no autorizadas; sanciones a los que destruyan propiedad escolar o interfieran en el normal desenvolvimiento de las actividades docentes; la expulsión del *campus* de las personas indeseables ajenas al mismo; y la destitución de los profesores involucrados en las protestas.

En algunos casos, como en Nueva York, se pasaron mociones legislativas en requerimiento de que todas las instituciones de enseñanza superior estableciesen su propio código de conservación del orden. Para el año presente, de hecho, han sido las mismas universidades —acusadas a menudo de leñidad indebida hacia los perturbadores— las que han adoptado medidas severas para prevenir los motines estudiantiles o habérselas con éstos tras su erupción. La Universidad de Columbia cuenta ahora con una fuerza de 100 hombres encargados de dar “protección y seguridad”. En la Univer-

sidad de California, sede de Los Angeles, el departamento policiaco del recinto se ha ampliado de 9 a 52 miembros en los últimos tres años; cuando ocurre algún disturbio de importancia, los administradores universitarios vacilan ahora raras veces en llamar a la fuerza de policía de la ciudad, aunque ésta ha invadido el *campus*, sin previa solicitud de las autoridades universitarias, en no menos de tres ocasiones.

En una institución como la Universidad de Wisconsin, donde en agosto una bomba hizo saltar en pedazos el centro de investigaciones matemáticas auspiciado económicamente por el Ejército y causó la muerte de un estudiante de ciencias, las precauciones contra nuevos atentados alcanzan actualmente proporciones masivas. El vicepresidente de la Universidad, Robert Taylor, ha advertido que habrá una verdadera exhibición de fuerzas de policía ante la menor señal de violencia. Hay rumores —que el temor expande— de que los estudiantes están acumulando armas y municiones en preparación a la reapertura escolar al término del mes. Un profesor comparó la situación a “un tornado en movimiento: nadie sabe cuándo va a golpear”.

No pocos centros de estudios superiores exigen en el presente que sus alumnos y los miembros de facultades lleven consigo tarjetas de identificación con fotografía, procedimiento no conocido hasta ahora en Estados Unidos. La Universidad de Wisconsin, según se alega, ha establecido un fondo de alrededor de 10.000 dólares para obtener información confidencial sobre los planes de los radicales. Los estudiantes califican esto de “sistema de espionaje”.

La tensión sicopolítica, sin embargo, no es tan elevada en todas partes; todavía no, por lo menos. La Universidad de Harvard, por ejemplo, ha reasegurado a los timoratos que no hay que adoptar medidas extraordinarias de seguridad para lidiar con los extremistas. En algunas ocasiones, una administración universitaria que ya se haya manifestado de parte de los estudiantes y profesores que atacan el continuo involucramiento de Estados Unidos en Asia Sudeste (y la lista comprende al presidente Cordier de la Universidad de Columbia, Brewster de Yale, el reverendo Hesburgh de Notre Dame, Coheen de Princeton— constata que es fácil distinguir entre los extremistas propensos a acciones violentas y los moderados que no advocan la violencia pero que de verdad disienten de muchas actitudes de la sociedad y sus regentes.